



*Al servicio de la Justicia y de la paz social*

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA DE DECISIÓN CIVIL**

**MAGISTRADO SUSTANCIADOR**  
**MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO**

Medellín D.E. de C., T., e I., veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Radicación n°.	05001 31 03 019 2022 00097 01
Proceso.	Ejecutivo
Demandante.	Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda.
Demandada.	Agro Cafetales S.A.S.
Procedencia.	Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín
Decisión.	Confirma auto que negó decretó pruebas
Tema.	Requisitos objetivos de las pruebas
Rdo. interno.	095-22
Interlocutorio No.	082-23

**ASUNTO A RESOLVER**

Procede la Sala a resolver la apelación formulada por el apoderado de la sociedad demandada, en contra del auto del 13 de septiembre de 2022, en lo atinente a le negativa del decreto de algunas pruebas solicitadas por la misma, en los siguientes términos:

**ANTECEDENTES**

**1.- Del trámite.** Formuló la Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda., demanda ejecutiva en contra de Agro Cafetales S.A.S., para el recaudo de las obligaciones que afirma le adeudan éstos, vertidas el pagaré adunado a la demanda, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín, el cual, mediante auto del 05 de abril de 2022, libró mandamiento ejecutivo (Archivos 03 y 06).

Vinculada la sociedad demandada, propuso como excepciones (Archivo 24):

1.1. *“El título valor que acompaña la demanda no fue firmado por la sociedad demandada AGRO CAFETALES, sino por la señora DIANA MARCELA HENAO para respaldar una obligación adquirida como persona natural”*. Indicando que el pagaré objeto de recaudo había sido llenado a mano, por la Cooperativa demandante, como si la sociedad Agro Cafetales fuera la que se hubiese obligado al pago de la suma referida en la cláusula primera; sin embargo, afirmó que cuando Diana Marcela Henao suscribió dicho documento y la carta de instrucciones lo había hecho a título personal para respaldar una deuda personal, lo que era conocido por dicho ente cooperativo.

1.2. *“La señora DIANA MARCELA HENAO pagó la obligación adquirida como persona natural y que se respaldó con el pagaré aportado con la demanda”*. Para tal efecto se aportaron los recibos de pago expedidos por la demandante, donde se indica fecha, concepto y valor.

1.3. *“Integración abusiva del título valor”*. Exponiendo que el pagaré contentivo de la obligación que se ejecuta no fue integrado conforme a las instrucciones dadas; pues en ninguna de éstas se indicó que aquél podía ser llenado colocando a Agro Cafetales, como deudor, por cuanto quien firmaba actuaba en su representación. Además, arguyó que se alude a un crédito destinado a la adquisición de un bien inmueble, cuando no sólo no existe éste, sino que, entre las partes solo podría existir una disputa por un contrato de venta de café; se alude en el pagaré a una cláusula aceleratoria, a la renuncia del domicilio y la autorización para que Cooperan, a cuenta de lo que debe el asociado, se pague con los aportes que tenga, sin que en la carta de instrucciones se haya hecho referencia a alguno de estos aspectos.

1.4. *“Las instrucciones fueron evidentemente insuficientes”*. Aduciendo que se había presentado demasiada amplitud, ambigüedad e insuficiencia en la “carta de instrucciones” sobre la cifra o valor con el que se llenaría el título valor, cuando éstas debían ser claras y precisas, con el fin de evitar una falsedad, una alteración o adulteración y/o en temeridad y mala fe. En este caso, indicó que se había relacionado como instrucción para este ítem: *“5. LA SUMA POR LA CUAL SE LLENA EL PAGARÉ, será en pesos colombianos e incluye capital, intereses, indemnizaciones, impuestos, sanciones, multas, pólizas y cauciones judiciales,*

*gastos y honorarios profesionales.*

1.5. “*Causa extraña: terminación del contrato*”. Arguyendo que en la cláusula decimotercera del contrato de venta de café con entrega futura se había pactado “*TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Además de la terminación por el cumplimiento de la vigencia pactada, el contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: (a) Fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrados, de acuerdo con las definiciones legales al respecto; (b) Por mutuo acuerdo entre las partes*”; y que, ciertamente en dicho negocio se había presentado una causa consistente en el fuerte invierno entre el 2020 y 2021 y los inconvenientes logísticos derivados de la pandemia, que redujeron sustancialmente la producción del café que mi la demandada vendió a la demandante.

1.6. “*Excepción de contrato no cumplido*”. Explicando que Cooperan, tenía una obligación previa frente al cumplimiento de las obligaciones de Agro Cafetales conforme se indica en la carátula del contrato donde se enlistan condiciones generales, y que no ha cumplido, cual era el pago de un anticipo pago, lo que nunca hizo, por lo que ésta no se encontraba en mora de cumplir.

1.7. “*Cláusula penal enorme*”. Consagrada en el artículo 1601 del Código Civil y que en este caso se daba de acuerdo a como se había pactado en el contrato de venta de café con entrega futura; conllevando a la aplicación de la regla de reducción para la cláusula penal enorme, por cuanto se trata de un contrato en el que se pactó un valor fijo a cargo de Cooperan, resultante de multiplicar el precio por la cantidad de café vendido, estimado como equivalente a la cosa que se debía dar por los caficultores (el café), cuando la cláusula no podía exceder del doble de ese valor del café.

1.8. “*Terminación del contrato: ruptura de la equivalencia de las prestaciones*”. De no admitirse la terminación del contrato por la ocurrencia de una causa extraña, como ya lo había argumentado, manifestó que era posible que se estimara su terminación ante el desequilibrio presentado en las prestaciones de las partes; ya que, durante la ejecución del contrato se había presentado un aumento sustancial del precio de los abonos, de la mano de obra y de los demás insumos para la producción del café, lo que había generado un aumento en los costos de producción y escasez del café, y por ende, un incremento en su precio.

1.9. *“El pagaré con carta de instrucciones no cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser tenido como título valor”*. Argumentó que no se había incluido la cláusula de negociabilidad a la orden o al portador, de acuerdo con lo previsto en los artículos 651 y 709 del Código de Comercio; se integró sin la forma de vencimiento, toda vez que el espacio que estaba destinado para tal efecto, se dejó en blanco, como lo exige esta última preceptiva.

Así las cosas, siendo el momento procesal oportuno, se convocó a audiencia para la evacuación de las etapas contempladas en los artículos los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, mediante auto del 13 de septiembre de 2022.

**2.- El auto apelado.** En la referida providencia, para los efectos señalados en el inciso 2 del numeral 2° del artículo 443 *ibídem*, se decretaron las pruebas a valorar y practicar, que se estimaron procedentes y se denegaron algunas solicitadas por la parte demandada, planteándose como argumento (Archivo 26):

2.1. En cuanto a la exhibición de documentos, se denegaron, entre otros, los siguientes:

- *“Los contratos celebrados en los años 2019, 2020 y 2021 entre Diana Marcela y Cooperan (particularmente el contrato de mutuo o préstamo al que corresponden las constancias de pago que se anexan con esta contestación); Pagarés firmados por Diana Marcela Henao, como persona natural, y COOPERAN firmados entre los años 2019, 2020 y 2021”*, por haberse presentado de manera indeterminada, lo que no permitía establecer los hechos que se pretendían probar; además, por cuanto al no indicarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo los cuales se habían suscrito dichos contratos, no era viable establecer la utilidad, pertinencia y conducencia de la misma; limitándose esta exhibición a los contratos celebrados que conllevaron a la emisión de los recibos de pago aportados créditos Nos. 46924, 45478, 46046, 45476, 43472 y 43318.

- *“Documento (acta u otro similar) en el que conste que Diana Marcela Henao obraba como representante legal de la sociedad AGRO CAFETALES al momento de firmar el pagaré en blanco que se anexó con la demanda”*, por no ser clara la clase de documento al que se aludía, por lo que no cumplía lo dispuesto en el artículo 266 del Código General del Proceso.

- “*Documento en el que conste la afiliación de AGRO CAFETALES a la Cooperativa*”, por cuanto tampoco era clara la clase de documento y en los hechos fundamento de las excepciones o en la causa petendi no aludía al vínculo existente entre las partes, por lo que se desconocía lo que se pretendía probar con el mismo.

- “*Constancias de pago de las obligaciones a COOPERAN, tanto a cargo de Diana Marcela Henao, como persona natural, como a cargo de AGRO CAFETALES*”, por cuanto no se hacía claridad sobre las obligaciones a las que se refería, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron constituidas, siendo impreciso en cuanto a los documentos solicitados.

1.2. Se negó el trámite de la tacha de falsedad documental, por cuanto no se aludía a una falsificación de la rúbrica obrante en el título objeto de recaudo, sino a un indebido diligenciamiento de espacios en blanco, por lo que este medio probatorio no era el adecuado para la acreditación de dicho hecho; no se superaban las exigencias de pertenencia y utilidad, ya que la demandante había reconocido llenar los espacios en blanco del referido título, incluyendo la palabra “Agrocafetales S.A.S.”; y no se había indicado la relevancia o utilidad de la prueba respecto del pagaré, que es el objeto de debate, pues en éste no existía fecha de suscripción, sino en la carta de instrucción, y con relación a esa fecha, solo se había indicado que no había sido puesta por la suscriptora del título.

1.3. Se negó el decreto de los dictámenes periciales solicitados, en razón que al tenor de lo establecido en el artículo 227 del Código General del Proceso, “*La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir prueba*”, sin que así se hubiera hecho por la demandada, o se hubiera sustentado la imposibilidad para allegar los mismos con la contestación.

Aunado a lo anterior, indicó que la prueba devenía improcedente por cuanto:

- Con relación al dictamen en grafología, con fundamento en los mismos argumentos planteados para denegar el trámite de la tacha de falsedad, dado que ambas pruebas tendrían la misma finalidad.

- Respecto al dictamen técnico agropecuario, por cuanto el propósito de la experticia no cumplía con la utilidad y pertinencia de la prueba, por cuanto lo solicitado era indeterminado y su finalidad difusa y abstracta, ya que no se

establecían mínimo de límites espacio-temporales sobre lo perseguido con la prueba, ni se especificaban prestaciones, ni obligaciones puntuales sobre las cuales se efectuaría el estudio.

**3.- La apelación.** Oportunamente el apoderado de la persona jurídica demandada, interpuso recurso de reposición y en subsidio, el de apelación, frente a la negativa del decreto de la prueba de las siguientes pruebas (Archivo 27):

3.1. Exhibición de documentos:

- Con relación a los contratos celebrados por Diana Marcela Henao, con la cooperativa demandante, durante los años 2019, 2020 y 2021, expuso que, al momento de solicitarse la prueba, expresamente se había indicado, que con la misma se pretendía probar que *“Cuando Diana Marcela Henao firmó el pagaré que se aportó con esta demanda no fungía como representante legal de AGRO CAFETALES”* y que *“No existe ningún pagaré que respalde las obligaciones surgidas con ocasión del contrato de venta de café con entrega futura celebrado entre COOPERAN y AGRO CAFETALES”*.

Precisó que el artículo 266 del Código General del Proceso, no exigía que se indicara la razón por cual se pretendían probar determinados hechos a través de este medio probatorio, sino que fueran indicados los hechos que se pretenden probar, lo que en este caso se había efectuado.

Agregó que en la formulación de las excepciones de mérito se señaló que la amplitud de la carta de instrucciones haría posible que la parte ejecutante, cobrara obligaciones inciertas y dudosas, por lo que se requería conocer la totalidad de los documentos donde pudieran figurar posibles deudas que ella hubiese adquirido con Cooperan, para probar que Diana Marcela Henao, suscribió el pagaré objeto de recaudo, a título personal, y que, en los que había participado Agro Cafetales se habían celebrado por intermedio de Daniel Felipe Henao.

- En cuanto al *“documento (acta u otro similar) en el que conste que Diana Marcela Henao obraba como representante legal de la sociedad Agro Cafetales al momento de firmar el pagaré en blanco que se anexó con la demanda”*, arguyó que, contrario a lo señalado por el Juzgado, en la solicitud de esta prueba, se había aclarado que el documento podía ser de cualquier tipo, esto es, acta o constancia

que diera cuenta que Diana Marcela Henao, había actuado como representante legal de la demandada, y no a título personal, al suscribir el pagaré objeto de recaudo y sus instrucciones, por lo que no existe indeterminación, ya se está clara la época y el lugar donde debió crearse ese documento, así como el hecho que se busca demostrar con su exhibición o, en su defecto, con su ausencia; por tanto, afirma que en este caso, se cumplieron con todos los requisitos exigidos en el artículo 266 del Código General del Proceso: *“(I) se enunció que el documento está en poder de la parte a quién se solicita, (II) se señaló cuál es el hecho que pretende probarse con la exhibición, (III) se dijo qué tipo de documento podría ser, y (IV) se explicó su relación con los hechos que dan lugar a la disputa.”*

- Respecto al *“Documento en el que conste la afiliación de AGRO CAFETALES a la Cooperativa”*, expuso que al señalarse cuáles eran los hechos que se pretendían probarse con la exhibición de documentos, se había estipulado que *“en la afiliación de AGRO CAFETALES a COOPERAN quedaba claro que la intención de la Cooperativa es comprar el café producido por la sociedad”*, mas no la adquisición de préstamos u otro tipo de obligaciones *“crediticias”*.

Frente a la indeterminación del documento, se precisa que efectivamente la norma establece los requisitos para el decreto de esta prueba con la finalidad de que los destinatarios de la solicitud tengan conocimiento suficiente de cuáles son los documentos que se les pide exhibir; y en este caso, afirma que Cooperan conoce los documentos privados por ella exige para la afiliación de personas jurídicas o naturales, y, en ese, orden de ideas, no se presenta confusión o indeterminación alguna frente a qué es lo que se solicita.

- En cuanto a las *“Constancias de pago de las obligaciones a COOPERAN, tanto a cargo de Diana Marcela Henao, como persona natural, como a cargo de AGRO CAFETALES”*, adujo que el hecho de comprender múltiples documentos los requeridos esta prueba, no hacía que la misma no estuviera delimitada, o que careciera de claridad y que se pretendía establecer cuáles eran las obligaciones que, en teoría, estaban pendientes de pago, ya que la parte ejecutante no había explicado hasta el momento de dónde surgía el monto incorporado al pagaré.

Por tanto, afirma que es necesario establecer cuáles obligaciones originaron el monto indicado en el pagaré que se pretende recaudar y cuáles de las adquiridas, se extinguieron por pago, en aras de verificar que dicho valor se ajusta a verdaderas

deudas, máxime ante la indeterminación de la carta de instrucciones, con relación al valor que debía imponerse en dicho título valor.

Así las cosas, considera que en este caso se cumplen igualmente los requisitos del artículo 266 del Código General del Proceso, dentro de los cuales no se enlistaba que se expresaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la creación de los documentos o las obligaciones, por lo que no es exigible a quien solicita esa exhibición enunciarlas, más aún cuando lo solicitado era claro, es decir, la totalidad de los documentos que acreditaran pagos.

### 3.2. Tacha de falsedad.

Arguyó que no era necesario que se pretendiera la tacha de la totalidad del documento para que procediera la tacha material, que si bien Diana Marcela Henao, había suscrito el pagaré, a título personal, la totalidad de las anotaciones manuscritas, distintas a su firma y cédula, esto es, la cuantía del derecho incorporado, la fecha de suscripción, la creación del título y la fecha de suscripción de la carta de instrucciones habían sido escritas por alguien más.

Por tanto, indicó que era relevante demostrar que la fecha de la supuesta suscripción de las instrucciones no había sido manuscrita por Diana Marcela Henao, sino por la misma persona que había llenado los espacios en blanco, al respecto, señaló que en el numeral 1.5. del primer grupo de excepciones de mérito, se había expuesto: *“Igualmente, nótese cómo, a pesar de que supuestamente el contrato y la carta de instrucciones fueron suscritas el mismo día (se dice “supuestamente” porque esa fecha tampoco la puso la señora Diana Marcela Henao, sino que a simple vista se ve que fue puesta después por la misma persona que llenó el pagaré), fueron firmados por personas diferentes (el señor Daniel Henao suscribió el contrato de compraventa, mientras que la señora Diana Marcela Henao firmó la carta de instrucciones).”*

Con lo anterior, adujo que, por un lado, se pretendía probar, que Cooperan no solo había llenado abusivamente el pagaré en blanco, sino también la carta de instrucciones, cuando no existían instrucciones para llenar otras instrucciones; las instrucciones y autorizaciones son solo para llenar el pagaré; y por otro, desvirtuar la afirmación efectuada por dicha cooperativa, consistente en que la fecha de la firma de la carta de instrucciones y del contrato de venta de café celebrado con Agro



Cafetales es indicio de que el pagaré sí se firmó con ocasión del contrato; y que no es cierto que ese documento haya sido suscrito el 24 de noviembre de 2019, sino que suscribió con anterioridad, y que fue cancelada por Diana Marcela Henao, conforme se acredita con los comprobantes de pago adunados a la contestación.

### 3.3. Testimonios de Diana Marcela Henao y Daniel Felipe Henao.

Señaló que consideró el Juzgado que, al estar designados como representantes legales de la sociedad demandada, no podían comparecer como testigos, por lo que solo podía versar su declaración sobre los hechos como representantes legales, en el transcurso de un interrogatorio de parte; sin embargo, estima que el hecho de que una persona figure como representante legal de una sociedad, no implica que todos los actos que ejerzan, sean en esa calidad.

Así las cosas, precisó que las declaraciones de Diana Marcela Henao o de Daniel Henao no podían confundirse con la declaración de Agro Cafetales, en tanto eran personas distintas, conforme lo establecido en el artículo 98 del Código de Comercio.

Además, afirma que el núcleo del litigio gira en torno a determinar si, cuando Diana Marcela Henao firmó el pagaré y la carta de instrucciones que se anexaron con la demanda, lo hizo como representante legal para garantizar un negocio jurídico celebrado por la sociedad, o si, al contrario, todo fue a título personal; por tanto, manifestó que su declaración era esencial para esclarecer la verdad, siendo además procedente a la luz de la normatividad procesal, debiendo considerarse únicamente la calidad en que se realiza para determinar los efectos de la misma, esto es, si se hace en calidad de representante legal, de ella se podrá inferir o bien una confesión, o bien una declaración de parte; ahora, si la declaración se hace sin invocar la representación legal y, por ello, sin obrar como representante, será una declaración de tercero —testimonio—.

Es así, que explica que Diana Marcela Henao y Daniel Henao no podrían, simultáneamente, rendir interrogatorio o declaración de parte, por lo que para no sacrificar ninguna de las dos declaraciones, lo procedente sería que uno obrara como representante de Agro Cafetales en el interrogatorio y el otro pudiera rendir su declaración como tercero, como persona natural que conoció directamente del asunto.

### 3.4. Dictámenes periciales.

- En cuanto a la pericia grafológica, argumentó que solo hasta el día en que había sido notificado el auto que decretó pruebas, la demandada había tenido acceso al documento, circunstancia que se había puesto de manifiesto en la contestación, al expresarse que *“El dictamen pericial solo podrá realizar una vez se exhiba el documento original”*.

Indicó que, en razón de lo anterior, en la solicitud de exhibición de documentos, se había pedido que se exhibiera el original, lo que solo se estaba ordenando en el auto que decretó pruebas, pues se requiere que el perito verifique las firmas impuestas sobre el documento físico.

Al respecto, señaló que la parte demandante expresó en el hecho séptimo de la demanda que *“Me permito indicar bajo la gravedad del juramento y aplicando el principio de la Buena fe, la lealtad procesal y dando cumplimiento al artículo 245 numeral 2 del C.G.P., que el título valor aducido como base de recaudo se encontraba (sic) bajo poder y custodia de la parte demandante”*, por lo que, insistió que solo sería viable la realización del dictamen, una vez se aprobara por el juzgado el acceso al documento físico por parte del perito.

- Respecto del dictamen técnico-apropecuario, manifestó que de considerase todo el tiempo transcurrido entre la notificación y la presentación de excepciones, para efectos de la presentación de esta prueba, y no solo el término de traslado de la demanda, el mismo era, de cualquier manera, insuficiente para tal efecto.

Aunado a lo anterior, expuso que, el artículo 227 del Código General del Proceso, contemplaba que, si la parte no podía aportar el dictamen pericial con la contestación, debía hacerlo *“(...) dentro del término que el juez conceda (...)”*; lo que significa que, si el dictamen no se aportó con la contestación, debía esperarse a que el Despacho autorizara incorporarlo al proceso, por lo que, solo hasta ese momento se sabría si podía aportarlo.

Ahora, en cuanto a la pertinencia y utilidad de la prueba, adujo que como ya se había aducido por esa parte, el único contrato entre Cooperan y Agro Cafetales contemplaba la causa extraña como forma de terminación de sus efectos y que en la página 28 de la contestación a la demanda se había anunciado como causa

extraña que afectó dicho negocio *“el fuerte invierno entre el 2020 y 2021 y los inconvenientes logísticos derivados de la pandemia, que redujeron sustancialmente la producción del café que mi representada vendió a COOPERAN”* y que en la página 35 del escrito de excepciones de mérito, se había argüido que se había presentado una ruptura del equilibrio económico del contrato, según se contemplaba el artículo 868 del Código de Comercio, dado que *“durante la ejecución del contrato se presentó un aumento sustancial del precio de los abonos, de la mano de obra y de los demás insumos para la producción del café”*.

Por tanto, adujo que el objeto del dictamen pericial solicitado es que un experto acredite la reducción de la producción de café y el aumento del valor de los insumos para el cultivo, beneficio y recolección, esto es, en los hechos que se soportan alguna de las excepciones alegadas.

## CONSIDERACIONES

**1.-Prueba judicial.** La prueba judicial es el acto procesal que tiene como finalidad permitir al operador jurídico arribar al convencimiento de los hechos objeto de controversia. En línea de principio, corresponde a los contendientes acreditar los hechos o excepciones que aduzcan, según el papel que desenvuelvan, en aras de lograr la prosperidad de sus súplicas.

Nuestra normativa procedimental civil establece ciertas exigencias que deben satisfacerse al momento de solicitar y practicar el medio probatorio, a efectos de que el funcionario pueda no solo decretarla sino también apreciarla al tiempo de su valoración. Tales exigencias son clasificadas por el doctrinante Azula Camacho<sup>1</sup> en: “Requisitos *Subjetivos*”, que se refieren a los sujetos y tienen en cuenta fundamentalmente dos aspectos “*LA COMPETENCIA Y LA LEGITIMACIÓN*”, la primera atañe al funcionario y la segunda a las partes; “*REQUISITOS OBJETIVOS*” se refieren a la materia u objeto del proceso y están constituidos por “*la conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal*” y “*REQUISITOS DE ACTIVIDAD*”, que se refiere a las circunstancias de “*lugar, tiempo y modo*”.

En lo que respecta a los requisitos objetivos, tenemos que:

---

<sup>1</sup> En su obra “MANUAL DE DERECHO PROBATORIO”. Editorial Temis S.A. Bogotá, 1998. Pág. 51 y ss.

*“A) Conducencia. Hace referencia a que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho... Así, por ejemplo, la compraventa de inmuebles es un acto solemne que debe constar por escritura pública, por lo cual la prueba conducente para demostrarlo es esta clase de documento.”*

*“B) Pertinencia. Mientras la conducencia es asunto de derecho, referente al medio probatorio, la pertinencia es de hecho, por relacionarse con lo que constituye materia del debate o la litis... consiste en que el hecho a demostrar se refiera o tenga relación con los que configuran controversia.”*

*“C) Utilidad. La utilidad hace referencia a que con la prueba pueda establecerse un hecho materia de la controversia que aún no se encuentre demostrado.”*

*“D) Ausencia de prohibición legal. La prueba puede ser conducente pertinente y útil y, sin embargo, no es dable decretarla y practicarla por prohibirla la ley...”*

Y en lo que se refiere a los últimos requisitos, es decir, los de actividad, tenemos lo siguiente:

- *Lugar.* Hace referencia al sitio donde deben cumplirse las etapas que integran la actividad probatoria, teniéndose como regla general, el Despacho Judicial que conoce del proceso.
- *Tiempo.* Alude a la oportunidad en la deben surtirse dichas etapas

Respecto de la oportunidad para solicitar las pruebas, contempla nuestra normatividad procesal civil, que los intervinientes en un trámite judicial, deberán hacerlo al momento de formular la demanda o incidente, al presentar las contestaciones a éstos, o formular excepciones, de ser el caso, como regla general, y en las mismas oportunidades aportar las que tengan en su poder y pretendan hacerlas valer.

- *Modo.* Hace referencia a la forma como se exteriorizan las diferentes etapas de la actividad probatoria, es decir, si se hace a través de la escritura o la oralidad.

Es en el auto de apertura del período probatorio donde el operador debe examinar si las pruebas solicitadas por las partes en los actos procesales previos, resultan idóneas para acreditar los supuestos objeto de controversia, debiendo rechazar *in limine* las que no, como expresamente refiere el canon 168 del Código General del Proceso:

*“El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.”*

Nótese que, tratándose de pruebas impertinentes o superfluas, esto es, aquellas que tienden a demostrar hechos que no guardan relación con el tema de controversia, o que aun teniéndola ya se encuentren acreditados, su impertinencia o inutilidad debe ser *“notoria o manifiesta”*, es decir, palpable u ostensible, pues de lo contrario lo procedente es que el juez disponga su práctica dada la posibilidad de que contribuyan al esclarecimiento de los supuestos debatidos.

**2.- Caso concreto.** En el *sub lite*, el *a quo* negó el decreto de algunas pruebas solicitadas por la parte demandada, por lo que el problema jurídico se circunscribe en determinar si cada una de las referidas pruebas, cumplen con todos los requisitos, que legalmente se exigen, de cara a las falencias advertidas por el *a quo* y los argumentos aducidos en el escrito de impugnación para refutarlas.

**2.1. Exhibición de documentos.** Conforme lo establecido en el artículo 265 del Código General del Proceso, esta prueba está contemplada, entre otras, con la finalidad de que la parte que tenga en su poder un documento que se pretenda hacer valer dentro del proceso, solicite, dentro del término legalmente establecido para solicitar pruebas, que lo exhiba en audiencia que ha de señalar el respectivo operador jurídico.

Para tal efecto, de acuerdo con el precepto 266 *ibídem*, se deben cumplir con siguientes requisitos:

- Indicación de los hechos que se pretenden demostrar, para acreditarse la pertinencia de la prueba
- Afirmar que *“el documento o la cosa”* que se pretende sea exhibido está en poder de la persona respecto de quien se hace la solicitud de exhibición.
- Clase de documento o cosa objeto de la exhibición, y demás características que permitan su determinación.
- Relación que tienen con los hechos que se buscar probar.

Examinando la forma como fue solicitada esta prueba por la demandada, puede advertirse que se cumplen todos los requisitos antes enunciados, respecto de los siguientes documentos, por las razones que pasan a explicarse:

- En cuanto a los *“contratos celebrados en los años 2019, 2020 y 2021 entre Diana Marcela Henao y COOPERAN (particularmente el contrato de mutuo o préstamo al que corresponden las constancias de pago que se anexan con esta contestación); Pagarés firmados por Diana Marcela Henao, como persona natural, y COOPERAN firmados entre los años 2019, 2020 y 2021”*, contrario a lo señalado por el a quo, no advierte esta Corporación tal indeterminación, pues es claro el tipo de documento que debe exhibirse –**contratos** celebrados entre Diana Marcela Henao y la cooperativa demandante y **pagarés** suscritos por aquélla como persona natural a favor de ésta-, así como la temporalidad de los mismos –celebrados entre el 2019 y 2021-, aspectos suficientes para que la parte que debe exhibirlos tenga certeza sobre lo pedido.

Ahora, el que no se indique de manera específica cuáles contratos o pagarés, no deriva en una indeterminación, pues se requieren **todos** los que cumplan las condiciones establecidos a los intervinientes en el contrato o dichos títulos valores, celebrados en ese período de tiempo, por lo que individualizar cada uno de ellos, resulta inocuo; máxime cuando tal información, así como las de tiempo, modo y lugar, bajo las cuales se suscribieron, escapan al conocimiento que pueda tener un tercero respecto de dichos negocios, esto es, a quien no intervino en los mismos.

De otro lado, no sólo se indicaron expresamente por la parte de mandada los hechos que se pretendían probar, sino que además, éstos se relacionan con los supuestos fácticos en los que se soportaron las excepciones, pues se tiene que con la exhibición de dichos documentos se pretende probar que el pagaré y la carta de instrucciones adunados a la presente demanda, fueron suscritos por Diana Marcela Henao, como persona natural, en razón que de que para la fecha de suscripción no fungía como representante legal de la sociedad demandada y, por el contrario, celebraba negocios como la demandante en aquélla calidad, por lo que las obligaciones derivadas de éstos se asumieron como persona natural; y además, que no existe ningún pagaré que respalde las obligaciones surgidas con ocasión del contrato de venta de café con entrega futura celebrado entre COOPERAN y AGRO CAFETALES.

- Frente al “*Documento (acta u otro similar) en el que conste que Diana Marcela Henao obraba como representante legal de la sociedad AGRO CAFETALES al momento de firmar el pagaré en blanco que se anexó con la demanda*”, también considera este Tribunal que la clase de documento si fue indicada, así como el contenido del mismo, esto es “*acta y otro similar*”, en el que se pueda establecer que para la fecha en que fue suscrito el pagaré objeto de recaudo, Diana Marcela Henao, actuaba en calidad de representante legal de la demandada, ante la cooperativa demandante.

Es decir, existe claridad respecto del documento que se pretende sea exhibido; el hecho que se pretende probar y que el mismo guarda relación con los medios exceptivos propuestos.

Ahora, en el evento de no contar la demandante con dicho documento, podrá aducir tal circunstancia como fundamento en la oposición que frente a la exhibición del mismo realice dentro de la oportunidad legalmente establecida.

- Con relación a las “*Constancias de pago de las obligaciones a COOPERAN, tanto a cargo de Diana Marcela Henao, como persona natural, como a cargo de AGRO CAFETALES*”, estima esta colegiatura, conforme se esbozó con antelación, que si se solicitan **todos** los contratos, así como los pagarés celebrados entre las citadas personas naturales y jurídicas, es viable que se peticione la exhibición de los pagos efectuados por éstas con relación a dichos negocios, máxime si se está aduciendo como excepción que el pagaré objeto de recaudo no sólo no fue suscrito en representación de la demandada, sino que además, la obligación que pretendía garantizarse con la firma del mismo y que fue adquirida por Diana Marcela Henao como personal natural, ya fue cancelada.

Por tanto, se revocará la decisión de denegar el decreto de la exhibición de los referidos documentos, para en su lugar, proceder al decreto de la misma, para que sea realizada en esta instancia, al tenor de lo establecido en el artículo 330 del Código General del Proceso, en la audiencia que para tal efecto se señale dentro del trámite de la apelación de sentencia asignada a este despacho.

- Respecto de los “*Documentos en el que conste la afiliación de AGRO CAFETALES a la Cooperativa*”, se considera que si bien existe claridad respecto de

los documentos sobre los cuales se pretendía la exhibición, no resulta útil para acreditar un hecho que interese al objeto de controversia, pues de demostrarse que la intención de la Cooperativa era comprar el café producido por la sociedad demandada, no conllevaría a acreditar los hechos en que se fundamentan las excepciones, concretamente que el pagaré objeto de recaudo fue firmado por Diana Marcela Henao como persona natural y no como representante legal de la demandada.

Por lo anterior, se confirmará la negativa del decreto frente a la exhibición de los citados documentos.

## 2.2. Tacha de falsedad.

Resulta acertada la aseveración efectuada por el Juez de primer grado en cuanto a que este trámite no tiene como finalidad la acreditación del indebido diligenciamiento de un documento; pero examinando la contestación y los cuestionamientos que se hacen al título y a la carta de instrucciones, no sólo se arguye por la demandada que los espacios en blanco del pagaré fueron llegados desatendiendo lo establecido en la carta de instrucciones –Integración abusiva-, sino que, además, alude que fue anotada en el pagaré el nombre de la sociedad demandada y demás datos, diferente a la firma y cédula, por persona diferente a la que suscribió el dicho título; en la carta de instrucciones se anotó la fecha en que supuestamente fue firmada ésta, pero que tampoco es de la autoría de la suscriptora de la misma.

Nótese que en la fundamentación de la excepción denominada *“El título valor que acompaña la demanda no fue firmado por la sociedad demandada AGRO CAFETALES, sino por la señora DIANA MARCELA HENAO para respaldar una obligación adquirida como persona natural”* (Primer grupo de excepciones), se arguyó, respecto del título que *“la única referencia a “Agro Cafetales S.A.S.” en el “pagaré” o en la “carta de instrucciones” fue incluida a mano por COOPERAN, tiempo después de la firma de la señora Diana Marcela Henao,…”*; y frente a la carta de instrucciones, que *a pesar de que supuestamente el contrato y la carta de instrucciones fueron suscritas el mismo día (se dice “supuestamente” **porque esa fecha tampoco la puso la señora Diana Marcela Henao, sino que a simple vista se ve que fue puesta después por la misma persona que llenó el pagaré**), fueron firmados por personas diferentes (el señor Daniel Henao suscribió el contrato*



*de compraventa, mientras que la señora Diana Marcela Henao firmó la carta de instrucciones) –Resalto intencional-.*

Ahora, si bien es cierto como lo señaló el a quo, dicho trámite resulta inútil para establecer que la palabra “*Agrocafetales S.A.S.*” contenida en el pagaré fue anotada por la acreedora, en razón de que ésta al pronunciarse frente a las excepciones confesó dicho hecho; también lo es, que negó el relacionado con la fecha impuesta en la carta de instrucciones, así:

*“...frente a la posición de la parte ejecutada en que afirma con temeridad y mala fe que **“esa fecha tampoco la puso la señora Diana Marcela Henao, sino que a simple vista se ve que fue puesta después por la misma persona que llenó el pagaré”**, resulta cuestionable si se tiene que la data entre ambos documentos en el que a todas luces se resalta su semejanza.”*

*“Desde ya se afirma que ninguna información contenida en la carta de instrucciones fue diligenciada por parte del acreedor, pues la condición en blanco solo repercute en el título valor y no en la carta de instrucciones como pretende generar convicción la parte ejecutada...”*

Significa lo anterior, que la autoría de la fecha de creación de la carta de instrucciones se encuentra en controversia, de lo cual se pretende demostrar por la demandada, que la misma fue impuesta por el acreedor y que difiere de la fecha real en que fue suscrita, pues se afirma que esto ocurrió con anterioridad a la fecha que figura dentro de dicho documento.

Por tanto, considerando que con relación a ese hecho no existe confesión por parte de la demandante y resulta de gran relevancia para el asunto objeto de debate, a pesar de no haber sido clara la parte al momento de solicitar la prueba, que este aspecto también haría parte del trámite de la tacha de falsedad, se revocará la negativa al decreto de este trámite y se accederá al mismo, pero solo para efectos de acreditarse si la letra con la que fue anotada la fecha de creación de la carta de instrucciones, se corresponde con la firma impuesta sobre la misma y en consecuencia, se decretará el dictamen por perito grafológico, pero solo para que se determine este aspecto, pues como se indicó, la imposición del nombre de la sociedad en el título, por parte de la acreedora, ya fue confesado por ésta.

### 2.3. Testimonial.

Fueron negados los testimonios de Diana Marcela Henao y Daniel Felipe Henao, por figurar éstos en el certificado de existencia y representación de la sociedad demandada como representantes legales, la primera como principal y el segundo, como suplente, por lo que estimó el a quo que los mismos estaban llamados a comparecer a rendir el interrogatorio de parte, diligencia en la que podrían exponer su conocimiento respecto al objeto de la Litis.

No obstante, estima esta Corporación que, al momento de rendirse el interrogatorio por la demandada, debe hacerse por intermedio de uno de sus representantes, como en efecto se hizo, por quien ostenta dicha calidad como principal, pues el suplente, solo asumiría dicha labor, en caso de no poder comparecer quien ejerce la presentación como principal; razón por la cual no podía indicarse que ambos deberán acudir a dicho interrogatorio.

Por tanto, se revocará la decisión de negar la prueba testimonial de Daniel Felipe Henao, para en su lugar, citarlo a declarar en dicha calidad y se mantendrá la negativa respecto de la citación de Diana Marcela Henao, quien, por ser la representante legal principal de la demandada, es a quien le corresponde rendir interrogatorio.

### 2.4. Dictámenes periciales.

Esta prueba se encuentra regulada en el artículo 226 y ss del Código General del Proceso, donde se establece, en los casos que una de las partes pretenda hacer valerla, debe aportarla dentro de la respectiva oportunidad para pedir pruebas.

Sin embargo, previendo el legislador que, en algunas ocasiones, el plazo con el que contaban las partes para solicitar las pruebas, no fuera suficiente para la elaboración de ciertas experticias, máxime tratándose del término de la parte resistente o del que se otorga a la demandante para replicar las excepciones, se facultó a la interesada para que en la misma oportunidad lo **anunciara** y lo aportara posteriormente, dentro del término que para tal efecto le concediera el funcionario judicial, que en ningún caso podría ser inferior a diez (10) días.

En este caso, la parte demandada, al contestar la demanda, expresamente señaló:

*“Conforme al artículo 227 del Código General del Proceso, solicito al Despacho se me permita allegar al presente proceso dos dictámenes periciales, los cuales entregaré en el término que conceda el Despacho para ese efecto (aunque solicito, de manera respetuosa, que sea de 30 días hábiles).*

*Esta solicitud de concesión de tiempo adicional obedece a la imposibilidad de presentar los dictámenes en el tiempo otorgado por el Juzgado para proponer las excepciones de mérito, pues ninguna institución podría realizar el análisis y entrega de las experticias en el tiempo concedido. Además, a la fecha no se cuenta con el documento original para realizar el dictamen.”*

Por tanto, el argumento de negarse los dictámenes solicitados por la parte demandada por no sustentar la imposibilidad para ser arrimados con la contestación, resulta improcedente, pues la norma no contempló como requisito para la procedencia de concederse un tiempo adicional a la oportunidad para presentar pruebas, que se indicara la razón que imposibilitaba presentarlo dentro de dicho término, solo se contempló que debía ser enunciado en la respectiva oportunidad, ante la insuficiencia del término para su presentación, aspectos que se manifestaron de manera expresa por la demandada.

Ahora, en cuanto a los requisitos de utilidad de la prueba, tenemos que, respecto de la prueba grafológica se aplican los mismos argumentos esbozados para el trámite de la tacha de falsedad, por lo que con el dictamen que se realizará para acreditar lo allí indicado, queda subsumido el que se había anunciado en la contestación, por cuanto el objeto es el mismo.

Respecto del dictamen técnico agropecuario, debe indicarse, que contrario a lo afirmado por el a quo, estima este Tribunal su pertinencia y utilidad, si se considera que, expresamente la parte demandada indicó que se pretendía acreditar con esta experticia *“ (I) las causas de disminución sustancial en la producción del café cuya entrega se prometió a COOPERAN, así como la disminución sufrida, y (II) el incremento y las causas de los costos de producción del café cuya entrega se prometió por parte de AGRO CAFETALES”*, que son en las que se fundamentan

dos de las excepciones del segundo grupo, y que se denominaron: “*Causa extraña: terminación del contrato*” y “*Terminación del contrato: ruptura de la equivalencia de las prestaciones*”.

En consecuencia, resultaba procedente el decreto de esta prueba y conceder el término adicional solicitado por la demandada para su presentación, por haber cumplido con lo exigido por el artículo 227 del Código General del Proceso para tal efecto.

### **DECISIÓN**

Corolario con lo expuesto, se confirmará la negativa a decretar la exhibición de los *documentos en el que conste la afiliación de AGRO CAFETALES a la Cooperativa*; y se revocará la decisión apelada, en cuanto a las demás pruebas negadas, por lo que ante este resultado no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: SE CONFIRMA** la decisión de negar el decreto de la exhibición de los *documentos en el que conste la afiliación de AGRO CAFETALES a la Cooperativa* y la de negar el testimonio de Diana Marcela Henao, contenida en el auto del 13 de septiembre de 2022, proferido por el JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, dentro de la ejecución instaurada por la Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda. en contra de Agro Cafetales S.A.S., por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: SE REVOCA** la decisión de negar el decreto de las demás pruebas pedidas por la parte demandada, para en su lugar, proceder a decretarlas así:

1. Se decreta la exhibición de los siguientes documentos:

- Contratos celebrados en los años 2019, 2020 y 2021 entre Diana Marcela Henao y COOPERAN (particularmente el contrato de mutuo o

préstamo al que corresponden las constancias de pago que se anexan con esta contestación); Pagarés firmados por Diana Marcela Henao, como persona natural, y COOPERAN firmados entre los años 2019, 2020 y 2021.

- Documento (acta u otro similar) en el que conste que Diana Marcela Henao obraba como representante legal de la sociedad AGRO CAFETALES al momento de firmar el pagaré en blanco que se anexó con la demanda.
- Constancias de pago de las obligaciones a COOPERAN, tanto a cargo de Diana Marcela Henao, como persona natural, como a cargo de AGRO CAFETALES.

La exhibición de estos documentos se realizará el día y la hora que señale para tal efecto, dentro del trámite de la apelación de la sentencia emitida el 09 de noviembre de 2022; no obstante, y desde ya, se requiere la sociedad Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda, para que dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación del presente auto, remita al correo electrónico [secivmedd@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:secivmedd@cendoj.ramajudicial.gov.co), los referidos documentos, los cuales serán exhibidos digitalmente.

2. Se decreta el testimonio de Daniel Felipe Henao, para ser practicado en la audiencia que para tal efecto se señale dentro del trámite de la apelación de sentencia, que se encuentra asignada a este despacho.
3. Se decreta el dictamen técnico agropecuario anunciado por la parte demandada en su contestación, por lo que se le concede el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia para que lo aporte.

**TERCERO: SE REVOCA** la decisión de no dar trámite a la tacha de falsedad, y en su lugar, se decreta el dictamen grafológico, solicitado dentro del mismo como prueba pero solo para que se determine si la letra de la fecha de creación de la carta de instrucciones, se corresponde con la firma impuesta sobre la misma, esto es, si pueden atribuirse al mismo autor, para lo cual se concederá igualmente el término de treinta (30) días, pero éste empezará a correr una vez se

entregue por de esta Corporación dicho documento, para lo cual se dispondrá oficiar al Juzgado de primera instancia, quien lo tiene en su poder, para que lo remita a la Secretaría de esta Sala, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia.

**CUARTO:** Sin costas en esta instancia.

**QUINTO:** Cumplido lo ordenado en este auto, agréguese el expediente correspondiente a esta apelación (01) al expediente contentivo de la apelación de sentencia (02).

**NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARIO GÓMEZ LONDOÑO', with a stylized flourish at the end.

**MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO**

**Magistrado**

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022